Ra Ximhai

Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo
Sustentable

Ra Ximhai
Universidad Autónoma Indígena de México
ISSN: 1665-0441
México

2006

RESEÑA

REFORMA AGRARIA DEL LATIFUNDIO AL NEOLIBERALISMO

Rosa Martínez Ruiz

Ra Ximhai, enero-abril, año/Vol.2, Número 1
Universidad Autónoma Indígena de México
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. pp. 271-276

e-revist@s

RESEÑA

REFORMA AGRARIA DEL LATIFUNDIO AL NEOLIBERALISMO

Título: Reforma agraria del Latifundio al Neoliberalismo.

Autor: Jesús C. Morret Sánchez.

Edición: Primera.

No. de páginas: 230.

Año: 2003.

Sin mucho lugar a dudas, se puede afirmar que este libro cumple con las expectativas de discutir la mayoría de los temas concernientes sobre la reforma agraria en México. Esta monumental obra viene a llenar un vacío desde largo tiempo sentido. Durante mucho tiempo será obra de consulta indispensable —que ofrece a profesionales y estudiantes— información sobre los antecedentes, causas, origen, consecuencias, y fin de la reforma agraria en México. El estilo utilizado por el autor, en los siete capítulos, ejercerá un atractivo especial al profano que se interese por la problemática agraria en México. Ciertamente, sorprenderá a los lectores el nombre del autor, por que figura el de una autoridad nacional sobre estudios en el área.

El trabajo es una amplia discusión sobre las reformas agrarias que ha llevado a cabo México a través de su historia. Es una invitación al análisis de aquellos problemas agrarios que, de diversas formas ha tenido el país.

Las aportaciones del Dr. Moret Sánchez que aquí se publican, están estructuradas en siete apartados:

1. Antecedentes de la reforma agraria
2. La auténtica reforma agraria
3. El ejido, forma de tenencia de la tierra, producto de la reforma agraria
4. Industrialización y reforma agraria
5. El ocaso de la reforma agraria
6. Prospectiva del sistema ejidal
7. Hacia una nueva estructura agraria en México

Voy a mencionar solo algunos aspectos importantes de este libro, pero aclarando que cada tema tiene diferentes apartados respectivos, por lo que invito a leer este interesante libro.

En la colonización española e incluso durante el siglo XIX, la propiedad de la tierra en México se concentraba en un número pequeño de propietarios que poseían grandes extensiones de tierra, mientras que una gran cantidad de habitantes del campo dedicados a la agricultura disponían de pequeñas superficies. Esto se debió fundamentalmente a la proliferación del capitalismo mundial como modelo económico en las últimas décadas del siglo XIX; lo que propició en México la adopción de un régimen de acumulación basado en la demanda externa de minerales y productos de origen agropecuario. Este proceso de expansión económica tuvo como base el sistema de haciendas en el medio rural cuya forma social de relación entre el hacendado y el trabajador del campo era el peonaje por endeudamiento (peón acasillado), lo que implicaba un cierto tipo de trabajo forzado por las deudas que el peón contraía en las tiendas de raya de la propia hacienda con rasgos de relación salarial. Pese al auge económico, a principios del siglo XX el País registró un estallido social sin precedentes (debido entre otras razones) a la violencia con que se expandía la hacienda y se destruía la esencia de la economía campesina. Después de la revolución armada del año 1910, sobrevino un intenso proceso de reivindicación con la sociedad campesina que implicó a la larga la clausura de la vía capitalista en la producción agropecuaria. La clase media que reclamaba la marginación política en que la tenía sumida el sistema, retomó las demandas agrarias lo que abrió las puertas a una profunda

reestructuración del agro mexicano. Basado fundamentalmente en los postulados magonistas y zapatistas, el Jefe del Ejército Constitucionalista promulgó el 6 de enero de 1915 una importante Ley Agraria que consagraba el derecho irrenunciable al acceso a la tierra para los campesinos que la trabajaban. Este principio de redistribución de la tierra a los campesinos se consagró a su vez en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 1917.

Las principales reivindicaciones de la Revolución de 1910 eran que las tierras, bosques y recursos hídricos fuesen expropiados de los grandes propietarios y entregados a los campesinos sin tierra para establecer ejidos y colonias agrarias. El gobierno pos-revolucionario concibió la creación de los ejidos como una forma de organización productiva y de representación de los campesinos organizados y, también, como un instrumento de control político.

Entre 1915 y 1934, las seis administraciones presidenciales redistribuyeron 10 millones de hectáreas en cuanto que el presidente Cárdenas, en seis años (1934-1940), entregó cerca de 19 millones de hectáreas a 729,000 ejidatarios. El nuevo Código Agrario, aprobado en la administración de Cárdenas, estableció los medios legales por los cuales los trabajadores de las haciendas (peones) podían convertirse en dueños de las tierras. Con la rápida distribución de la propiedad.

En el período de 1940 a 1958, las políticas agrarias fueron modificadas destinando las mejores tierras para las medianas y grandes haciendas y el límite de la pequeña propiedad fue ampliado a 100 hectáreas de tierra fértil o su equivalente en áreas de calidad inferior.

Desde 1970, la agricultura de subsistencia, basada en prácticas tradicionales de producción de los campesinos (uso de tracción animal, semillas nativas, control biológico, fertilizantes orgánicos, rotación de cultivos) fueron degradados por procedimientos inadecuados de modernización tecnológica, implantados por organizaciones gubernamentales de investigación y desarrollo rural.

Las administraciones de 1976 a 1988, en varias ocasiones, hicieron modificaciones similares a las de los años cuarenta y cincuenta, procurando sustituir la reforma agraria por

políticas destinadas al aumento de la productividad. Los pequeños productores fueron puestos de lado, en cuanto que la agricultura de gran escala y los ganaderos recibieron la mayoría de los subsidios, inversiones y ayudas financieras.

Después de los años ochenta, los subsidios para el sector rural se terminaron. México comenzó a invertir en otros sectores para ser globalmente competitivo. Los ajustes estructurales acompañaron las ideas persistentes de promover inversiones extranjeras en la agricultura. El gobierno no poseía una política de soberanía alimentaria, considerando la producción de granos en pequeña escala como no lucrativa e incapaz de atraer inversiones.

Otro problema se crea cuando empieza la eliminación de los subsidios y la privatización o extinción de muchas agencias públicas del sector rural, afectaron el acceso al crédito, a los seguros, al mercado, a tecnologías modernas, semillas mejoradas, agua y riego, asistencia técnica e infraestructura básica y aumentaron los costos de insumos y servicios.

El abandono a los campesinos por los programas del sistema financiero rural y el cierre de la Aseguradora Nacional Agrícola y Pecuaria S.A. fueron parte del desmantelamiento del sector rural. Recortes en los préstamos además de la redirección de los préstamos hacia los grandes productores, y el debilitamiento de las instituciones fue acompañado por la falta de establecimiento de agencias financieras privadas en las comunidades. Otro gran problema ha sido la incapacidad del sistema financiero rural en proveer al sector con capital para inversiones de largo plazo en "tecnologías competitivas."

Una de las reformas de mayor trascendencia a principios de los años 90 fue la reforma al Artículo 27 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

En 1992, la reforma al Artículo 27 fue aprobada por 388 votos a favor y 45 en contra. Los objetivos de la nueva ley eran disminuir el crecimiento del minifundio, promoviendo inversiones para aumentar la producción, con la promesa del presidente Salinas de generar más empleos y crear organizaciones para los trabajadores agrícolas. La enmienda vino como parte del paquete de reformas neoliberales que incluían la creación de la Zona de Libre Comercio de América del Norte (TLC, incluyendo Canadá, México y los Estados

Unidos); la privatización de empresas estatales; el desregulamiento de los mercados de productoras agrícolas y la privatización de el control del riego.

Las principales consecuencias a la enmienda del artículo 27 fueron la ruptura del contrato social rural, la privatización del ejido, la destrucción de las comunidades agrarias indígenas, la creación de nuevas formas de concentración de la tierra y la expulsión de millones de familias rurales para las ciudades.

Ésta, tuvo como propósito fundamental establecer el marco jurídico suficiente para propiciar las condiciones mínimas necesarias que favorecieran el desarrollo rural, que posibilitaran la capitalización del campo y que permitieran asegurar el abasto alimenticio de la población, ya sea mediante la generación de productos para el consumo o de productos como bienes de intercambio que mejoraran la balanza agropecuaria. Los elementos que apostaban a estas condiciones suficientes fueron plasmados en el marco legal agrario vigente a partir de 1992.

En este contexto, en 1994 entró en vigor el Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que en esencia significa la apertura gradual de los mercados de Canadá, Estados Unidos y México para que en un plazo máximo de quince años (en el 2009), exista un libre flujo de intercambio comercial entre los tres países. Un año después de la entrada en vigor del Tratado se redefinió el objetivo de la política agrícola de México estableciéndose como prioridad mejorar las habilidades de los productores y estimular el desarrollo tecnológico para incrementar La productividad y la competitividad del sector en el contexto del TLCAN. Se crea entonces en 1995 la Comisión Intersecretarial del Gabinete Agropecuario y se firma una Alianza para el Campo que enumera los principales objetivos de la política agrícola, que de alguna manera vienen a ser una reafirmación de los objetivos establecidos en 1990 con el Programa Nacional de Modernización de la Agricultura.

Las formas más comunes de acceso a la tierra en México eran por arrendamiento, la subcontratación, la hipoteca, el préstamo y la aparcería. Después de la reforma al Artículo 27 y con el Programa de Certificación de los Derechos Agrarios y Titulación de Habitación Urbana (PROCEDE), el mercado de tierra aumentó en forma de compra y venta,

arrendamiento y otras formas de transacción de tierra entre los miembros de las comunidades rurales y con personas de fuera.

Con la reforma, el sector del ejido sufrió un fuerte decline en niveles tecnológicos excepto en el uso de algunas semillas mejoradas, como el sorgo. Las pocas inversiones en tecnología se destinaron a los grandes productores.

Hoy el futuro rural de México esta siendo decidido. Catorce años después de la reforma al artículo 27 y después de doce años del TLC, pequeños y medianos agricultores no han podido competir con los productores agrícolas subvencionados de los Estados Unidos. Los campesinos se van organizando en un vasto movimiento llamado “El Campo No Aguanta Más”, que incluye 12 organizaciones campesinas nacionales.

Como conclusión general del libro es impostergable replantear en los márgenes de la gobernabilidad la vigencia de los programas y estrategias que dan forma a los objetivos de las políticas públicas agrarias, agropecuarias y ambientales, es necesario entonces redefinir, primero en el discurso político y luego en el ejercicio de gobierno, las acciones para lograr autosuficiencia alimentaria con desarrollo regional equilibrado, crecimiento económico del medio rural con aprovechamiento sustentable (la incorporación de las comunidades rurales para la solución de sus problemas) de los recursos naturales, y desarrollo agrario con justicia social.

Rosa Martínez Ruiz. Doctorada en Ciencias en Biotecnología Forestal por el Colegio de Postgraduados. Maestra en Ciencias en Ciencias Forestales por la Universidad Autónoma Chapingo. Ingeniera Agrícola especialista en Agroecosistemas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Investigador en el Programa Forestal de la Universidad Autónoma Indígena de México. Correo electrónico: ruizrosa@uaim.edu.mx